ALBERTO GARCIA MÜLLER
Profesor Titular de la Universidad de los Andes

LA ECONOMIA DEL TRABAJO (SOCIAL O SOLIDARIA)
EN LAS CONSTITUCIONES DE AMERICA LATINA

MERIDA/VENEZUELA - 1.993

SUMARIO

OBJETIVOS

I. CONCEPTOS PREVIOS

- 1) El Sector de la Economía del Trabajo (Social o Solidaria)
- 2) La Constitución y los tipos de Constitución
- 3) El Proceso de Constitucionalización

II. ANTECEDENTES NORMATIVOS, DOCTRINARIOS Y ORGANIZATIVOS

- 1) Tratamiento del Sector en las Constituciones Ibéricas
- 2) Constituciones Latinoamericanas más significativas
- 3) Propuestas Organizacionales y Doctrinales

III. EL SISTEMA DE INFORMACION LEGISLATIVA SOBRE LA ECONOMIA DEL TRABAJO EN AMERICA LATINA (SILETAL)

- 1) Objetivos
- 2) Metodología
- 3) Aplicación

IV. LA ECONOMIA DEL TRABAJO EN LAS CONSTITUCIONES DE AMERICA LATINA

- 1.1. Ubicación
- 1.2. Reconocimiento
- 1.3. Naturaleza
- 1.4. Política Estatal
- 1.5. Propiedad

V. CONCLUSIONES

VI. REFERENCIAS

El presente trabajo tiene por OBJETIVOS:

Analizar el estado de situación de la Economía del Trabajo (Social o Solidaria) en las Constituciones de los países de América Latina.

Se estudia sistemáticamente la manera cómo es contemplado el Sector de la Economía del Trabajo en los textos constitucionales de América Latina, por medio del análisis comparativo de los institutos normativos en materia de Economía Social contenidos en las diversas constituciones de la región.

El tratamiento de la información se hace por medio de un sistema que permite efectuar comparaciones detalladas de manera instantánea, utilizando recursos electrónicos, denominado SILETAL, que más adelante será sintéticamente presentado.

De manera complementaria se presenta información sobre los antecedentes normativos, Constituciones comparadas, opiniones doctrinales, Acuerdos y Resoluciones de eventos, así como propuestas y opiniones de Organizaciones vinculadas al Sector, sobre la materia.

En base a la información documental contenida en este trabajo, se pretende servir de instrumento para la consulta y orientación a las organizaciones del Sector, a los Gobiernos, a los Parlamentarios interesados y a los estudiosos de la materia, para el análisis de alternativas o posibilidades de inclusión de normas referentes al Sector de la Economía del Trabajo (Social o Solidaria) en los Proyectos de Enmiendas, de Reformas Constitucionales o de Asambleas Constituyentes que se produzcan en los diversos países de América Latina.

Las organizaciones que conforman el Sector en pocas ocasiones participan en la formulación de propuestas en los casos de proyectos de enmiendas, reformas o asambleas constituyentes que se plantean en los países de la Región, fundamentalmente por no tener a su alcance documentación pertinente sobre el tema.

De esta manera, ha quedado al criterio de los proyectistas (sin conocimiento real de la problemática y significación del Sector) la formulación de los contenidos a incluir en los proyectos respectivos, con las subsiguientes carencias y deficiencias en su formulación, cuando no francamente opuestas al tratamiento particular que debiera tener el mismo. Con este estudio se intenta contribuir a revertir tal situación, ofreciendo a los interesados información pertinente.

I. CONCEPTOS PREVIOS:

Antes de tratar el tema central del presente trabajo: "La situación de la Economía del Trabajo (Social o Solidaria) en las Constituciones de América Latina", es preciso determinar sucintamente el sentido de los siguientes conceptos que van a ser utilizados: qué se entiende por Sector de la Economía del Trabajo; qué es una

Constitución; las clases de Constitución existentes y lo que se denomina Proceso de Constitucionalización.

1) El Sector de la Economía del Trabajo (Social o Solidaria):

Por tal se entiende el conjunto integrado e interactuante de organizaciones económicas y sociales de propiedad y gestión de los trabajadores que actúan en un país determinado, o, incluso, en una región de un país.

La base social del Sector de la Economía del Trabajo lo constituyen todos los productores nacionales y, en general, los trabajadores asociados en organizaciones económico sociales, tales como las cooperativas, las mutualidades, las empresas comunitarias o solidarias, las asociaciones de trabajo, las Cajas de Ahorro Popular, Fondos de Empleados, Ejidos, las empresas de propiedad social y demás formas de economía social o autogestionaria existentes en los países, y todas las que se creen por impulso del mismo sector.

El Sector de la Economía del Trabajo (Social o Solidaria) en América Latina tiene una fuerza cuantitativa considerable. Según ciertas estimaciones, comprende más de 60.000 organizaciones de base, con cerca de 75 millones de personas económicamente activas que reciben servicios o se benefician de él.

Estas organizaciones debieran integrarse al interior de cada rama y esfera de producción mediante una articulación vertical, y entre las diferentes ramas económicas y fases de producción y de los servicios, a través de una articulación horizontal, dentro de un proceso que arranca desde la base hasta llegar a la comunidad nacional.

La integración de las organizaciones que conforman el sector se expresaría en la corresponsabilidad en la gestión de un modelo macro-económico autogestionario, donde la extracción, la transformación, la comercialización, el financiamiento, los servicios y el consumo son actividades articuladas e integradas, cerrando el circuito económico dentro del propio Sector.

Así, el Sector de la Economía del Trabajo, sustentado sobre su propia base económico-social, podrá surgir y consolidarse como un nuevo sector dinámico en la economía nacional; autónomo frente al sector de economía de lucro y al sector de la economía pública (CLAT/COLACOT, 1988).

El Sector de la Economía del Trabajo se sustenta en unos principios fundamentales, que la definen y caracterizan, y que son los siguientes:

- a) Primacía del trabajo sobre el capital, en especial, del trabajo asociado;
- b) La propiedad social, comunal, autogestionaria o familiar de los medios de producción;

- c) Prioridad en la producción, transformación, distribución y consumo de bienes y servicios esenciales y primarios, así como la generación de empleo productivo;
- d) Ayuda mutua, solidaridad y protección del medio ambiente;
- e) Formación solidaria y capacitación técnica permanente y obligatoria;
- f) Integración sectorial, funcional y operativa a todos los niveles y actividades, y articulación con las demás formas organizativas de los trabajadores (García, 1989. 102).

2) La Constitución y los Tipos de Constitución:

a) **La Constitución:**

La Constitución puede ser entendida como el conjunto de normas o disposiciones del más alto nivel y jerarquía dentro de cada país, que regula la estructura y funcionamiento básico de los órganos del Poder Público (poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado). Define los principios y objetivos fundamentales de la Nación, así como establece los derechos, deberes y garantías de los ciudadanos. Es la máxima ley de un país. En América Latina, la totalidad de las constituciones tiene forma escrita.

b) **Los Tipos de Constitución:**

De acuerdo a su contenido, las constituciones pueden clasificarse en tres tipos: constituciones políticas, constituciones sociales y constituciones político-sociales.

1. *La Constitución Política:*

Este tipo de Constitución comprende exclusivamente las instituciones políticas del Estado y su regulación fundamental. Regula los Poderes Públicos, la actividad política de la sociedad, así como los derechos y garantías individuales de los ciudadanos. La Constitución política es la expresión del Estado. Deja al margen las formas de integración social y los derechos e instituciones sociales.

"La Constitución puramente política es anacrónica, porque la sociedad humana no sólo está compuesta de hombres, de individuos políticos, sino de grupos humanos, de clases sociales, así como el mar no sólo está constituido por olas. Estos grupos quedan al margen de las constituciones políticas, lo cual significa menosprecio del trabajador y del campesino, del Ejido, del sindicato, de la cooperativa, etc. La Constitución puramente política es el aparato que utiliza el Estado Liberal...". (Trueba, 1971. 17).

2. La Constitución Social:

En este tipo de Constitución se integran normas económicas y sociales y no exclusivamente políticas. La Constitución social regula las actividades de las clases o de los grupos sociales. Establece derechos sociales además de los derechos y garantías individuales y políticos.

"Las necesidades y aspiraciones de la vida social, manifestadas constantemente al través de un derecho popular nacido de las entrañas mismas de la sociedad, integran la Constitución social, con garantías específicas protectoras y redentoras de obreros y campesinos" (Trueba, 1971. 25).

3. La Constitución Político-Social:

La Constitución Político-Social corresponde a la conjugación en un sólo texto de las materias que integran la Constitución Política y la Constitución Social.

"La Constitución Político-Social se caracteriza por su esencia política y social, incluyendo en su sistemática jurídica derechos individuales y derechos sociales; reglas especiales, en cuanto a éstos últimos, o sea de los grupos humanos que constituyen las clases económicamente débiles" (Trueba, 1971. 38).

Las viejas Constituciones liberales no consideraban sino dos términos en la vida social: el individuo y el Estado. Un movimiento progresivo se ha abierto en todas las constituciones del mundo para reconcer y afianzar derechos a grupos sociales como la familia, como el sindicato, como las cooperativas que llenan finalidades muy importantes y distintas de las que cumple el Estado en la vida social (Caldera, 1960).

La casi totalidad de las constituciones actuales de América Latina responde al tipo de Constitución Político-Social.

3) El proceso de Constitucionalización:

Por Constitucionalización se entiende el proceso de incorporación a los textos constitucionales de disposiciones sobre determinadas materias, a los fines de darle la mayor estabilidad y jerarquía dentro de la sociedad.

Salvo muy contadas excepciones (Portugal, Ecuador, México) en que se reconoce constitucionalmente el Sector Social o Solidario como un Sector de la Economía, el proceso de constitucionalización del Sector se ha referido casi exclusivamente a las cooperativas.

Según nuestro conocimiento, la primera Constitución que incorporó normas sobre el cooperativismo fue la del Cantón de Zurich (Suiza) de 1869 que proclamó: "El

Estado fomenta y facilita el desarrollo de la cooperación basada en la ayuda mutua" (Artículo 33).

Dos elementos se destacan en esta primera Constitución: la obligación a cargo del Estado de promover el cooperativismo, y el carácter mutuo del mismo.

El reconocimiento Constitucional de las cooperativas constituye la más alta garantía jurídica para la organización, funcionamiento y desarrollo del cooperativismo en un país (Gutierrez, 1986).

El fenómeno, referido al sector cooperativo, recuerda el caso de la constitucionalización del Derecho del Trabajo, y cuyo móvil, la función social, inmanente en ambos, parece ser similar (Luis, 1972. 399). Por otra parte, la incorporación del cooperativismo en el texto constitucional representa el reconocimiento de un amplio movimiento de ideas y de opiniones expresados en lo que Gurrich llamaría la democracia pluralista (Caldera, 1960).

II. ANTECEDENTES NORMATIVOS, DOCTRINARIOS Y ORGANIZATIVOS

1) Tratamiento del Sector en las Constituciones Ibéricas:

De manera de servir de marco de referencia, analizaremos el tratamiento del Sector en estas Constituciones especialmente significativas para los latinoamericanos:

a) **Constitución Portuguesa (1976):**

Es el texto constitucional más avanzado en el tratamiento del cooperativismo. Le dedica o hace referencia en los Artículos 61, 65, 81, 84, 89, 97, 98, 100 y 102.

Reconoce al Sector Cooperativo como un tercer sector de propiedad, junto al público y al privado.

Garantiza expresamente el derecho a formar cooperativas; prohíbe restricciones para su constitución y las libera de cualquier clase de autorización. Reconoce los principios cooperativos, inclusive el de integración.

Obliga al Estado a su estímulo y apoyo, tanto en forma genérica, como a las formas cooperativas particulares: de vivienda, de consumo, de producción y comercialización. Remite a la Ley la definición de beneficios fiscales, financieros y de asistencia técnica.

Considera el cooperativismo como uno de los principales mecanismos para el éxito de la Reforma Agraria: entrega de propiedades expropiadas; integración de minifundistas; apoyo del Estado para la constitución de cooperativas de trabajadores

rurales y pequeños y medianos agricultores, y ayuda estatal en crédito, asistencia técnica y apoyo en la comercialización.

b) Constitución Española (1978):

Esta Constitución establece que los Poderes Públicos fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas (Artículo 129,2).

El mandato constitucional ha de entenderse como el propósito de un fomento eficaz y verdadero, que no se agote en una sola ley, sino en el ensamblaje de todas las disposiciones, cualquiera sea su rango y naturaleza, que tengan por destinatario a las cooperativas (De Luis, 1987).

La Constitución Española trata al cooperativismo de manera progresista y avanzada, en forma clara, concisa y concreta. Al incluir la materia en el Capítulo Económico, implica una concepción empresarial y económica del cooperativismo (Reyna, 1987).

2) Constituciones Latinoamericanas más significativas en el tratamiento del Sector:

Veamos, a continuación, las Constituciones más significativas de América Latina en su manera de tratar el Sector:

a) Constitución mexicana de 1917:

Es la primera Constitución Latinoamericana que contempla el fenómeno cooperativo, a la par de ser la primera Constitución Político-Social del mundo, seguida por la de Weimar, de 1919.

El artículo 123, Fracción XXX: considera de utilidad social las sociedades cooperativas para la construcción de casas baratas e higiénicas. El artículo 28 considera que no son monopolio las cooperativas y asociaciones de productores que se constituyan para la venta al extranjero de los productos que fueran la principal fuente de riqueza de la región en que se produzcan, siempre que no se trate de artículos de primera necesidad.

b) Constitución del Ecuador (1977):

Por primera vez a nivel Constitucional se reconoce el Sector comunitario o de autogestión, integrado por empresas cooperativas, comunales o similares, formando parte expresa de la Economía Nacional, al lado de los sectores público, privado y mixto.

c) Constitución de México (1983):

Es la segunda Constitución Latinoamericana que considera el Sector Social compuesto por los Ejidos, las organizaciones y empresas de trabajadores, cooperativas, comunidades y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

c) Constitución de Brasil (1988):

"Se trata de uno de los 2 textos más avanzados del mundo, en lo que concierne a las disposiciones sobre cooperativas. Se trata de un grán avance y, comparado con las constituciones de otros países que también lo protegen, sin sombra de duda, que se trata de uno de los dos mejores textos constitucionales sobre el cooperativismo, tal vez sólo sobrepasado por la constitución de Portugal" (Périus, 1989. 19)

Lo esencial de ella es que eleva el Acto Cooperativo a rango constitucional y le define un tratamiento tributario adecuado.

d) Constitución de Colombia (1991):

Los rasgos más resaltantes son: a) Se eleva el control del Estado sobre las cooperativas a rango constitucional (Marquez, 1991); b) Las considera como instrumentos de privatización, ofreciendoles condiciones especiales para acceder a la propiedad accionaria de la enajenación de la participación del Estado en las Empresas.

e) El cooperativismo en las Constituciones Provinciales de Argentina.

En este País quizás con la más fuerte tradición cooperativista en el área, se encuentra la presencia del cooperativismo en algo más de 12 Constituciones Provinciales. Farias y Moretti, (1986) distinguen entre ellas: a) aquellas en las cuales se declara la función social y/o el interés público del cooperativismo; b) las que reconocen participación del cooperativismo en las actividades socio-económicas de sus respectivas provincias, subrayando la lamentable ausencia de su reconocimiento expreso.

3) Propuestas Organizacionales y Doctrinales:

A continuación se hace una breve relación de las propuestas de constitucionalización del Sector en diversos eventos o reuniones; de las proposiciones de las organizaciones representativas del mismo, así como de los aportes de los principales autores de la especialidad, de manera de tener una visión más completa del objeto en estudio.

a) Eventos realizados:

1. *El I Congreso Continental de Derecho Cooperativo*, celebrado en Mérida/Venezuela en 1969. Carta de Mérida, declara: "El principio constitucional de

asociarse a una cooperativa y la autonomía de ésta deben ser garantizados por el Estado".

2. El Documento Final del *II Congreso Continental de Derecho Cooperativo*, efectuado en San Juan/Puerto Rico en 1976, señala que "El Estado debe garantizar el derecho de asociación cooperativa voluntaria, elevando el principio a rango constitucional".

3. *III Congreso Continental de Derecho Cooperativo*, Rosario/Argentina, 1986. Comisión N° 1: Valoración Constitucional del Cooperativismo. No hay un cuerpo de de conclusiones, sino una descripción de las ponencias sobre el tema.

4. *Reunión de Expertos en Derecho Cooperativo*, Santa Cruz de la Sierra/Bolivia, 1987 puntualiza: "Es conveniente un adecuado marco legal de protección para el fomento y la autonomía cooperativa a nivel constitucional...".

5. *I Encuentro Nacional sobre Derecho Cooperativo*, Santa Fe de Bogotá, 1991. Ponencia sobre el Sector Solidario en la Constitución Política de Colombia de 1991.

b) Propuestas Organizacionales:

1. *La Confederación de Cooperativas de Colombia* (1988) señala: La presencia que ha demostrado el cooperativismo le basta para tener una identidad y naturaleza propias, diferentes a las de otros tipos de organizaciones sociales contempladas en el marco de entidades sin fines de lucro.

En tal sentido, propone la inclusión de un nuevo artículo en proyecto de Constitución Colombiana, en los siguientes términos. "Por considerarlo de interés social, el Estado reconoce y fomenta el libre y autónomo desarrollo de la Economía Solidaria como sector de la Economía, representada en el cooperativismo y otras empresas de carácter autogestionario, comunitario y mutualista, se garantiza la propiedad cooperativa y comunitaria, en igualdad de derechos con la propiedad pública, mixta o privada, el interés comunitario prima sobre el interés privado".

Además, propone que las organizaciones del Sector tengan participación efectiva en la elaboración, ejecución, evaluación y control de los planes de desarrollo.

2. *La Organización de las Cooperativas Brasileñas* define las materias sobre cooperativismo a incluir en las Constituciones Estadales del Brasil: "a) participación de las cooperativas en la ejecución de la Reforma Agraria; b) estímulo y apoyo al cooperativismo como instrumento de desarrollo stadal y de eliminación de diferencias sociales; c) defensa de la enseñanza cooperativista. Sugerimos que esta materia sea de matrícula facultativa y se imponga en las Escuelas estadales y municipales; d) defensa

de la presencia de las cooperativas junto a los órganos y consejos estatales ligados directa o indirectamente con el sistema cooperativo" (Péruis, 1989. 49).

3. *La Confederación Latinoamericana de Cooperativas y Mutuales de Trabajadores* plantea: Para que el Sector de la Economía del Trabajo (SET) pueda obtener un marco normativo favorable a su pleno desarrollo, es menester que en la Constitución política del Estado se dispongan normas de carácter jurídico-doctrinario en las que sustentarse. En la actualidad, las Constituciones de Ecuador y México presentan un marco propicio de sustentación.

El resto de las constituciones sólo ofrecen un marco genérico o tácito, como lo es el principio de la libertad de asociación o de la protección al trabajo en cualquiera de sus formas, o la simple declaración del fomento y protección a la economía popular.

Pensamos que para que el SET pueda convertirse en una realidad operante a nivel legal, es necesario que en la Constitución política -dada su supremacía, primacía y permanencia- se establezcan disposiciones expresas, contenidas en un capítulo específico, de ser posible en el título relativo a las garantías sociales.

Los principios normativos de rango constitucional podrían ser los siguientes:

a) Consagración del SET como un sector propio de la actividad nacional, junto a los demás sectores, en igualdad de derechos y obligaciones, y la garantía de su plena autonomía;

b) Declaración de la utilidad pública e interés social y, o nacional del SET, con la correspondiente obligación del Estado en su fomento y protección;

c) Reconocimiento de la propiedad social, autogestionaria o propiedad SET, como una forma privilegiada de propiedad;

d) Obligatoriedad de la formación y capacitación solidaria en todos los niveles y expresiones del sistema educativo;

e) Posibilidad de reservar y conceder preferencias al SET para el ejercicio de determinadas actividades socioeconómicas, y el traspaso de ciertos cometidos del Estado al SET, en particular, de Servicios Públicos o actividades sociales;

f) Obligatoriedad de financiamiento del Estado al SET, con la garantía de su manejo autónomo y principio de unidad de fiscalización y control público del SET a nivel Ministerial, así como de la concertación con el mismo (García, 1989. 100).

c) **Propuestas Doctrinales:**

1. *Torres* (1986) advierte que sólo en las Constituciones Sociales, o de corte económico-político, en las que se incluyen instituciones sociales fundamentales, es donde el cooperativismo encuentra su ubicación, lo que es lógico por dos razones fundamentales: la primera, a que el cooperativismo es posterior a las primeras constituciones de mayor influencia: la segunda, la constatación producto del análisis de 47 textos constitucionales, de los cuales 22 se refieren al cooperativismo, de la manera siguiente: del bloque socialista del momento: 9; de Europa Occidental: 3; del área Musulmana: 2; del área Bolivariana: 5 y otros: 3.

2. *Macagno* (1969) observa que en la mayoría de las constituciones se reconoce el derecho de organizarse cooperativamente al reconocerse el derecho genérico de asociación. Plantea que se debe "declarar innecesario la inclusión de principios jurídicos cooperativos en el orden constitucional, para el caso en que en las respectivas cartas magnas se encuentre reconocido el derecho de asociación; ello sin defecto de considerarse saludable dicha jerarquización".

A esta posición se le observa que aunque la Carta Magna reconozca el Derecho de Asociación, puede asegurarse que no existen normas constitucionales sobre las cuales asentar el Sector, puesto que no se establece la variable de asociación en formas tan especializadas, además que el encuadramiento secundario y analógico hace que el reconocimiento se efectúe por deducción y no del reconocimiento objetivo, lo que sitúa al Sector en posiciones desventajosas y a la zaga (Confederación de cooperativas de Colombia, 1988).

3. *Blanco y Tozzini* (1986) sostienen que el cooperativismo debe incluirse como un derecho subjetivo-social, dentro del Capítulo Constitucional de los Derechos y Garantías, aunque no de forma limitativa, para evitar el cercenamiento del fenómeno, que se produce y concreta en las más diversas formas.

4. *Salamanca* (1986) es de la opinión que el cooperativismo debe ser reconocido constitucionalmente, remitiéndose a la legislación los principios básicos en que se debe fundamentar toda cooperativa, y señalará las exenciones y ventajas que debe tener, dadas sus especiales características e importancia para la comunidad.

5. El reconocido experto en Derecho Cooperativo Latinoamericano Comparado, *Torres* (1986) propone que las constituciones contemplen el cooperativismo como uno de los instrumentos más beneficiosos de la sociedad, siempre que se mantenga entre dos extremos que es preciso evitar: el primero, considerarlo como la única alternativa, pues se caería en la negación de su filosofía antitotalitaria; el segundo, mantenerlo al margen del intervencionismo estatal, para no convertirlo eventualmente en mero instrumento de los grupos políticos de turno en el poder.

6. Para *Ortiz* (1986) la Constitución debe reconocer el cooperativismo como un Sector político, económico y social y darle jerarquía al Derecho Cooperativo como un derecho autónomo.

Además, estima que pueden darse tres sistemas de tratamiento constitucional al cooperativismo: a) la República Cooperativa: el cooperativismo como propuesta de un sistema global de sociedad; b) el cooperativismo como un Sector de la Economía y, c) el cooperativismo como un rol subsidiario en el sistema.

7. *Vasquez* (1987) propone institucionalizar a nivel constitucional una política a favor de las cooperativas que comprenda: "a) Igual tratamiento a todo tipo de cooperativas; b) Fomento y fiscalización sin afectar su independencia; c) Facilidades para su formación y funcionamiento; d) Educación cooperativa en todos los niveles de enseñanza; e) Legislación especial para el régimen cooperativo; f) Derecho a operar en condiciones, por lo menos iguales, a cualquier otra forma de asociación objeto de legislación especial; g) Exoneración de Impuestos; h) Estímulo y respaldo a la integración, dentro de cada tipo de cooperativa y a nivel general".

8. *Galarza* (1987) plantea que toda ley fundamental debe establecer la promoción de organizaciones solidarias, basadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua, así como normas que aseguren la prestación de servicios de utilidad social por parte de las cooperativas

9. Para *Brunet, Gómez y otros* (1986), la Constitución debe imponer al Estado la protección de la propiedad cooperativa, a la vez que orientar, ayudar y estimular su desarrollo.

10. *De Campos* (1986) propone la inclusión de 3 artículos en la reforma futura de la Constitución Argentina, que contemplen: a) libertad de formación, administración y autocontrol; b) actuación en todas las ramas de actividad; c) acceso a los incentivos fiscales, así como prohibición generalizada de instituir impuestos sobre el acto cooperativo, que debe figurar expresamente en el texto constitucional, d) la obligación del Poder Público de fomentar y apoyar las actividades cooperativas.

III. EL SISTEMA DE INFORMACION LEGISLATIVO SOBRE LA ECONOMIA DEL TRABAJO EN AMERICA LATINA (SILETAL)

En este apartado se delinea el sistema diseñado por el autor para el tratamiento comparativo de la normativa aplicable al Sector de la Economía del Trabajo, denominado SILETAL, Proyecto de Investigación cofinanciado por la Universidad de los Andes (Mérida/Venezuela) y la Confederación Latinoamericana de Cooperativas y Mutuales de Trabajadores (COLACOT) con sede en Santa Fe de Bogotá/Colombia.

1) Objetivos:

Mantener un registro computarizado, comparativo y actualizado, de las legislaciones que regulan la Economía del Trabajo (Social o Solidaria) en los países de América Latina. Comprende las leyes sobre Cooperativas, Mutuales, Cajas de Ahorro, Fondos de Empleados, Empresas Comunitarias y demás formas asociativas de propiedad y gestión de los trabajadores.

Igualmente, comprende las disposiciones constitucionales sobre el Sector, cuyos resultados serán presentados en el siguiente apartado.

2) Metodología:

Teóricamente constituye una matriz de doble entrada, cuya vertical es un Patrón de Análisis (Ficha) y la horizontal, la concurrencia en el Patrón, del contenido sobre la materia en cada legislación (o Constitución).

a) El Patrón de Análisis permite identificar y categorizar los institutos jurídico-normativos contenidos en las diversas legislaciones (o Constituciones) sobre Economía del Trabajo, Social o Solidaria en América Latina.

Este patrón consiste en un sistema de desagregación exhaustiva de los componentes normativos, llevado hasta sus elementos primario-unitarios (Atomo Normativo) en sistema binario, de manera de poder tratarlos electrónicamente.

b) El Patrón de Análisis se trasvasa o convierte a un programa de computación especialmente diseñado (Base de Datos Maestra), de manera de poder verter en él la forma como cada legislación de la materia (o Constitución) contempla cada uno de los elementos normativos primarios-unitarios establecidos.

Para la fecha, el Patrón de Análisis terminado -en su primera versión- alcanzó el 100% del total, ocupando aproximadamente 1 millón de bytes (2 millones y cuarto, contando los controles y comandos), en 93 archivos.

c) Vertimiento al Patrón de Análisis convertido al programa de computación, de las legislaciones (o Constituciones) disponibles, ubicando sus contenidos en las categorías preestablecidas de forma exhaustiva en aquél. Para la fecha, se ha vertido la totalidad de las Constituciones Latinoamericanas disponibles, cuyos resultados son presentados en este trabajo.

Además, se ha terminado la ley venezolana sobre cooperativas y se trabaja en la Ley de Cooperativas de Colombia. En una primera etapa se vertirá y procesará el resto de leyes de los países Bolivarianos sobre la materia.

3) Aplicación:

Se trata de un sistema de Legislación Comparada, en forma instantánea y a ser actualizado permanentemente, que permite establecer comparaciones significativas (semejanzas y diferencias de tratamiento legislativo sobre puntos muy concretos y específicos -al detalle-) lo que redundará en la posibilidad de profundizar ampliamente en el conocimiento de la especialidad.

El Sistema permite tener, en un mismo momento y lugar, de forma rápida y accesible, todas las leyes (o normas constitucionales) sobre la materia en América Latina, área geográfica inicial seleccionada por razones obvias, desagregados sus Institutos Normativos en sus Elementos Fundamentales, hasta llegar a sus Componentes Normativos Unitario-Primarios.

Con ello se pueden realizar estudios jurídico-comparativos complejos y exhaustivos en la especialidad, puesto que permite seleccionar tanto la amplitud como el alcance del objeto a tratar: determinación de países, de sub-sectores o de institutos normativos, hasta llegar, si se desea, a la norma puntual o específica a comparar.

IV. LA ECONOMIA DEL TRABAJO EN LAS CONSTITUCIONES DE AMERICA LATINA:

A continuación se presenta el resumen de resultados (o salidas) que arroja el tratamiento de las Constituciones por medio del SILETAL. Se advierte que el Programa de Computación utilizado no es el definitivo, sino una versión preliminar del mismo. Igualmente, la numeración empleada no se corresponde con la que viene hasta este momento y obedece a la metodología propia del sistema.

Para la presente investigación fueron procesadas la totalidad de las Constituciones nacionales de América Latina (19 Constituciones).

1.1. UBICACION:

Comprende los datos de identificación de las normas que hacen referencia a la materia.

1.1.1. Fecha de Promulgación de la Constitución:

País / Día / Mes / Año

Argentina	01	5	1853
Bolivia	02	2	1967
Brasil	05	10	1988
Colombia	04	7	1991
Costa Rica	07	11	1949
Cuba	01	08	1992
Chile	21	10	1980
Ecuador	07	12	1977
El Salvador	16	12	1983
Guatemala	31	5	1985
Honduras	03	6	1965
México		2	1983
Nicaragua	9	11	1986
Panamá	24	4	1983
Paraguay	20	6	1992
Perú	11	12	1993
República Dominicana	28	11	1966
Uruguay	24	8	1966
Venezuela	23	1	1961

1.1.2. Ambito:

Se refiere al espacio o ámbito geográfico de aplicación de la Constitución: Nacional o Provincial/Estadal.

Como antes se dijo, todas las Constituciones procesadas son de ámbito nacional.

1.1.3. Artículos que hacen referencia a la materia:

<i>Pais</i>	<i>Artículos</i>
Argentina	14
Bolivia	7 160 167 168
Brasil	5 146 174 187 192
Colombia	51 58 60 64 189 333
Costa Rica	25 64
Cuba	19 20
Chile	19
Ecuador	46 49
El Salvador	105 114
Guatemala	34 67 119
Honduras	88 142 143
México	25
Nicaragua	5 31 49 103 104 109
Panamá	39 122 283
Paraguay	42 64 113 114
Perú	2 17 60 88 89
República Dominicana	8
Uruguay	39
Venezuela	70 72

1.1.4. Localización

1.1.4.1. Sistema:

Tiene que ver con la manera cómo se ubican las normas sobre el tema en estudio en las Constituciones: si en un sólo Capítulo, Artículo o Sección, o diseminadas a lo largo del texto.

1.1.4.1.1. Concentrado:

9 Constituciones tienen sistema concentrado: Argentina, Costa Rica, Chile, Cuba, México, Honduras, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

1.1.4.1.2. Disperso:

10 Constituciones optan por el sistema disperso: Perú, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, El Salvador y Paraguay.

1.1.4.2. *Normas:*

Si las disposiciones de la materia forman parte de las normas Constitucionales que constituyen simples declaratorias de principios (Programáticas), o se trata de disposiciones que establecen mecanismos concretos para su aplicación (Operativas):

1.1.4.2.1. Programáticas/Genéricas:

4 Constituciones: Argentina, Ecuador, Uruguay y Venezuela contemplan al Sector dentro de las normas programáticas.

1.1.4.2.2. Operativas o de Aplicación:

El resto de las Constituciones analizadas contemplan el Sector dentro de las normas operativas o de aplicación.

1.1.4.3. *Lugar:*

El sitio específico de la Constitución (Título, Capítulo o Sección) en donde se encuentran localizadas las normas sobre la materia:

1.1.4.3.1. Fundamentales/Generales/El Estado:

Las Constituciones de Cuba y Nicaragua incluyen las normas referidas al Sector dentro de los Capítulos o títulos Generales o Fundamentales.

1.1.4.3.2. Derechos/Garantías-Deberes:

En 14 Constituciones las normas sobre el Sector se encuentran en los Capítulos dedicados a los Derechos, Deberes y Garantías de las personas. Dentro de estos, se discriminan así:

Derechos Individuales: 3 Brasil y México y República Dominicana
Derechos Colectivos: 1 Brasil
Derechos Sociales: 7

ay, Perú y Venezuela

Derechos Económicos: 3 Colombia, Perú y República Dominicana
Derechos Políticos: 2 Ecuador y Nicaragua

1.1.4.3.3. Poder:

La Constitución Colombiana contempla el Sector dentro de las normas referidas al Poder Público, particularmente, dentro del Poder Ejecutivo Nacional. La de Cuba se refiere en forma genérica al Organismo estatal competente.

1.1.4.3.4. Régimen/Normas/Política/Orden:

8 Constituciones ubican las normas referidas al Sector en alguno de estos sitios, de la siguiente forma:

Social: 2 Bolivia y Guatemala
Economico: 6 Perú, Colombia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua y Panamá
Trabajo: 1 Honduras
Hacienda: 1 Colombia
Agrario: 3 Perú, Bolivia y Panamá
Reforma Agraria: 1 Nicaragua
Campesino: 2 Peru y Bolivia
Indígena/Nativo: 1 Guatemala

1.1.5. Histórica:

Ralaciona la fecha y los artículos de las Constituciones inmediatamente anteriores (disponibles) que hacen referencia al tema:

<i>Pais</i>	<i>Fecha</i>	<i>Artículos</i>
Argentina		
Bolivia	23/11/1945	126
Brasil	09/01/1071	10
Colombia		
Costa Rica		
Cuba	24/02/1976	15 20
Chile		
Ecuador		
El Salvador		
Guatemala		
Honduras	19/12/1957	130 131
México	05/02/1917	28 123
Nicaragua	17/09/1979	31
Panamá	01/03/1946	95 122 229
Paraguay	25/08/1967	128
Perú	12/07/1979	18 30 112 116 157 162
República Dominicana		
Uruguay		
Venezuela	05/07/1947	71

1.2. RECONOCIMIENTO:

Se trata de la forma cómo es considerado el Sector o las unidades que la componen en los textos Constitucionales: su inclusión dentro del Derecho de Asociación o su reconocimiento expreso, bien como un sector diferenciado, o sólo de las unidades de base que lo integran; su autonomía, así como los titulares o personas que las integran:

1.2.1. Derecho de Asociación:

15 Constituciones establecen la libertad o el Derecho de Asociación, dentro del cual pueden comprenderse las organizaciones pertenecientes al Sector, como expresiones particulares del Derecho de Asociación.

3 Constituciones (Argentina, Chile y Uruguay) son las únicas que contemplan exclusivamente el Derecho genérico de Asociación, sin hacer ninguna otra referencia al Sector.

1.2.1.1. Tipo:

En 15 Constituciones es reconocido el Derecho de Asociación genérico (derecho de asociarse de conformidad con la Ley y con fines lícitos) y 2, en conformidad con la moral o las buenas costumbres.

Es de resaltar que la Constitución Brasileña prevé en forma expresa el Derecho de Asociación Cooperativa y la Cubana, permite a los Agricultores pequeños incorporar sus tierras exclusivamente a cooperativas de producción Agropecuaria.

1.2.1.2. Forma:

Las Constituciones de 7 países establecen el Derecho de Asociación en forma totalmente libre, o no indican requisitos o formalidades, y 7, el Derecho de Asociación condicionado a la autorización estatal o al cumplimiento de formalidades o requisitos legales.

1.2.2. Autonomía:

Las Constituciones de Brasil y Paraguay reconocen, en forma expresa, autonomía a las organizaciones cooperativas. Brasil les confiere autonomía para su formación y, además, establece explícitamente la prohibición de la interferencia estatal en su funcionamiento.

Cuba, en cuanto a la administración, posesión, uso y disposición de los bienes de su propiedad, referido exclusivamente a las cooperativas de producción Agropecuaria. Perú otorga a las comunidades campesinas y nativas autonomía en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo.

1.2.3. Sector Diferenciado:

Ecuador y México reconocen la Economía Social o Solidaria como un Sector diferenciado dentro del país, al lado del Público y del privado. Ecuador lo denomina Sector Comunitario o Autogestionario. México, lo llama Sector Social.

Nicaragua considera la propiedad asociativa, cooperativa y comunitaria formando parte de la Economía Mixta, junto a las distintas formas de, tanto pública como privada. Con ello, entendemos, establece un sector diferenciado de propiedad, al lado de las propiedades pública y privada.

1.2.4. Expreso de Unidades:

15 Constituciones sólo reconocen formas particulares de Unidades componentes del Sector:

1.2.4.1. Cooperativas:

15 Constituciones contemplan las cooperativas dentro de su texto. De ellas, 11 lo hacen en forma genérica ("cooperativas") mientras que 7 indican formas específicas de cooperativas.

La Constitución de Brasil se refiere expresamente a cooperativas de Crédito. Honduras y Panamá, a las de Producción, de Industrialización y de Consumo. Brasil, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Paraguay a las Agrícolas. El Salvador, las Campesinas. Honduras, las Comerciales. Las cooperativas Mineras están previstas en la Constitución del Brasil. Cuba, exclusivamente las de Producción Agropecuaria y Perú se refiere a la educación comunal o cooperativa.

1.2.4.2. Ejidos:

Los Ejidos son reconocidos sólo en el texto Constitucional Mexicano.

1.2.4.3. Otras Formas:

En 11 Constituciones se encuentran otras formas organizativas diferentes a las Cooperativas y Ejidos. Estas formas son las Empresas, Comunidades, Asociaciones, Sociedades, Organizaciones, Corporaciones y Programas o Entidades Asociativas, Solidarias, Autogestionarias, Comunitarias, Comunales, Campesinas, Nativas o Familiares.

1.2.4.4. Titulares:

8 Constituciones determinan quienes son los miembros o titulares de las organizaciones del Sector.

Ecuador y México las reservan para los trabajadores quienes, a su vez, deben ser propietarios de dichas unidades. Honduras y Nicaragua señalan expresamente a los campesinos. Guatemala, a los indígenas, Brasil, a los mineros (Garimpeiros) y Cuba a los Agricultores pequeños.

1.2.5. Sector Agrario:

10 Constituciones hacen referencia especial a las cooperativas agrarias.

Las Constituciones de El Salvador y Paraguay establecen que a estas cooperativas debe dársele un tratamiento especial. La Constitución del Brasil indica que se las tomará en cuenta en el diseño de la política agrícola del país.

Nicaragua, que el Estado apoyará la capacidad técnica y productiva de las cooperativas agrarias. Cuba ordena al Estado brindar todo el apoyo posible a las cooperativas de Producción Agropecuaria.

1.2.6. Acto:

La Constitución de Brasil es la primera y única que eleva el acto cooperativo a rango constitucional, cuando refiere a la Ley dar un adecuado tratamiento tributario al acto cooperativo practicado por las sociedades cooperativas.

1.3. NATURALEZA:

Bajo este apartado se analiza el tratamiento fundamental del Sector o de las unidades que lo componen en las Constituciones estudiadas: si se les reconoce personería jurídica y qué tipo o naturaleza jurídica se les atribuye; el carácter de utilidad público, privado o mixto que se les otorga; el reconocimiento de los principios que lo informan y los fines que se considera deben perseguir.

1.3.1. Personalidad Jurídica:

1.3.1.1. *Personería:*

La Constitución del Perú es la única que confiere a las comunidades campesinas y nativas existencia legal y personería jurídica. Ninguna otra Constitución reconoce en forma expresa personería jurídica a las cooperativas y empresas autogestionarias.

1.3.1.2. *Naturaleza:*

La Constitución de El Salvador ubica las cooperativas como Asociaciones; la de Brasil como Sociedades y las de Honduras y Nicaragua como Empresas. Las demás Constituciones (14) no les dan connotación alguna y las denominan simplemente "cooperativas", lo que pudiera dar pie a entender que se las trata como un tipo diferente y específico de persona colectiva.

1.3.2. Carácter:

La Constitución cubana indica que la propiedad cooperativa es una forma avanzada y eficiente de producción socialista. La Constitución nicaraguense somete a la propiedad asociativa, cooperativa y comunitaria, al igual que a la propiedad pública o privada, a los intereses superiores de la Nación.

En relación a si se trata de entidades que puedan ser consideradas de interés, utilidad o función pública, común, general, colectiva, social o nacional, ninguna de las Constitución analizadas hace referencia a este punto.

1.3.3. Principios:

La Constitución de Nicaragua resalta el carácter voluntario y la no discriminación de sexo en las cooperativas agrícolas. Paraguay se refiere expresamente a la solidaridad, la rentabilidad social y los principios del cooperativismo.

Ninguna otra Constitución se refiere en su texto a los principios que deben informar al Sector o a las organizaciones que lo componen.

1.3.4. Finalidad:

7 Constituciones indican de alguna manera la finalidad a cumplir por parte de las organizaciones que conforman el Sector. Las demás no dan connotación alguna al Sector o sus componentes.

La de Venezuela las considera instrumentos de mejora de la economía popular. Brasil, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua las conceptúan como medios de promoción y protección de los intereses, o asegurar la calidad o las condiciones de vida de las personas o de los ciudadanos, de los trabajadores, campesinos y mineros.

La Constitución Mexicana les da por finalidad la producción, distribución y Consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. La de Paraguay, como instrumentos de desarrollo económico y social de la Nación.

1.3.5. Criterios:

La Constitución de México sujeta el Sector Social al interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. La Constitución de Honduras advierte contra el uso de las cooperativas para eludir o adulterar el régimen de trabajo establecido en ella. Las demás Constituciones no establecen nada sobre la materia.

1.4. POLITICA ESTATAL:

Este Capítulo analiza las formas cómo las Constituciones de América Latina definen las relaciones entre el Estado y el Sector o las organizaciones que lo componen. Comprende los órganos del Poder Público a los que se les atribuye ingerencia directa sobre el mismo (Competencia), y las diversas medidas que las Constituciones contemplan en relación con el (Legislación, Participación, Protección y Fomento, Control, etc.).

1.4.1. Competencia:

La Constitución Colombiana atribuye expresamente competencia a un órgano del Poder Público. En el caso, al Presidente de la República se le atribuye la inspección, vigilancia y control sobre las entidades cooperativas. La Constitución Cubana se refiere en forma genérica al Organismo Estatal Competente.

1.4.2. Medidas:

Las medidas que proponen las Constituciones en relación al Sector, son:

1.4.2.1. Legislación:

8 Constituciones remiten a la Ley la regulación del Sector o de las unidades que lo integran, y 4 de ellas ordenan el dictado de legislación específica que las regule, con lo cual, además, reservan tácitamente su regulación a la Ley.

La Constitución de Brasil va más allá al disponer que debe ser una legislación "adecuada". Las Constituciones de Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, México y Honduras definen genéricamente el contenido de la legislación a dictar, de la forma siguiente:

- 2 Constituciones: Organización
- 2 Constituciones: Regulación
- 1 Constitución: Control
- 1 Constitución: Funcionamiento
- 4 Constituciones: Fomento, Protección y Desarrollo

1.4.2.2. *Tratamiento al Sector/Unidades:*

Las Constituciones de Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Paraguay y República Dominicana ordenan expresamente un tratamiento preferencial al Sector de la forma siguiente:

Brasil, prioridad en las autorizaciones y concesiones de exploración y explotación Minera; Colombia, el ofrecimiento de condiciones especiales para la adquisición de acciones y participaciones que tuviere el Estado en Empresas cuando éste las enajene. Guatemala, la protección especial del Estado a las tierras de las organizaciones que conforman el Sector; República Dominicana, la posibilidad de convertir las Empresas del Estado en propiedad de cooperación. La Constitución de Nicaragua establece que las empresas del Sector Mixto tendrán un tratamiento igualitario ante la Ley y ante las políticas económicas del Estado.

1.4.2.3. *Participación en el Estado:*

Ninguna Constitución prevee normas que permitan la participación de las organizaciones solidarias en los Entes del Estado o en los Planes nacionales, provinciales/Estadales o locales/Municipales de Desarrollo.

1.4.2.4. *Instituciones Públicas Especializadas:*

Solamente la Constitución de Panamá ordena la creación de una Agencia Pública especializada en las cooperativas, asignándole cometidos de Registro, Promoción, Fomento y Control, y estableciendo la gratuidad de sus actuaciones.

1.4.2.5. *Protección/Fomento/Apoyo del Estado:*

14 Constituciones contemplan medidas de Protección, Fomento o Apoyo del Estado al Sector o a las organizaciones que lo integran, a través de algunos de los siguientes dispositivos:

1.4.2.5.1. Obligación del Estado:

Las Constituciones de Cuba, Guatemala, Honduras y Panamá obligan al Estado, de manera expresa, a darles Protección, Fomento y Apoyo, mientras que otras 11 Constituciones lo hacen de forma tácita, al indicar medidas específicas a adoptar en tal sentido, particularmente en orden a estimular o facilitar su creación, organización y funcionamiento.

1.4.2.5.2. Asistencia/Ayuda Técnica:

Las Constituciones de Cuba, Guatemala y Nicaragua obligan al Estado a prestar asistencia o ayuda técnica a las organizaciones del Sector, bien sea crediticia o financiera, como en el caso de Guatemala, o Material y de apoyo a la producción cooperativa, como en el caso de Cuba y Nicaragua. Las demás, no tocan la materia.

1.4.2.5.3. Planificación de su Desarrollo:

Tan sólo la Constitución de Bolivia establece a cargo del Estado la planificación del desarrollo económico y social de las cooperativas y comunidades indígenas.

1.4.2.5.4. Financiamiento:

La Constitución de El Salvador es la única que obliga al Estado a facilitar Financiamiento a las cooperativas como mecanismo concreto para su protección y fomento.

1.4.2.5.5. Tratamiento Tributario:

La Constitución de Brasil es la única que prevé un tratamiento fiscal especial al Sector, cuando encomienda a la Ley Tributaria establecer normas generales para darle un adecuado tratamiento tributario al acto cooperativo practicado por las sociedades cooperativas.

1.4.2.5.6. Protección a Unidades de Crédito:

La Constitución de Brasil otorga especial protección a las cooperativas de Crédito, cuando al remitir a la Ley que regula el Sistema Financiero Nacional, le ordena dar a este tipo de organizaciones el carácter y la estructuración propia de las Instituciones Financieras.

1.4.2.6. *Control del Estado:*

Las Constituciones de Colombia y Panamá disponen el control estatal sobre las cooperativas. La primera, le asigna al Ejecutivo Nacional ejercer, de acuerdo con la Ley, su inspección, vigilancia y control. La segunda, obliga al Estado a crear las instituciones necesarias a tales fines.

1.4.2.7. *Educación y Capacitación:*

Las Constituciones de Paraguay y Perú son las únicas que se refieren a la educación prestada bajo forma comunal o cooperativa. La de Paraguay dispone que los principios del cooperativismo serán difundidos a través del sistema educativo. La del Perú, prevé subvenciones del Estado a la educación comunal y cooperativa en favor de quienes no puedan sufragar su educación.

1.5. PROPIEDAD:

En este apartado se analiza la manera cómo es considerada la propiedad cooperativa, social, comunitaria o social dentro de las Constituciones; los tipos de propiedad reconocidos y quienes pueden ser sus titulares o detentadores.

1.5.1. **Tratamiento:**

Las Constituciones de 8 países hacen alguna referencia a la propiedad del Sector o de sus organismos, y 4 de ellas reconocen este tipo de propiedad de manera específica. Las Constituciones de Cuba y El Salvador le dan el carácter de privilegiada.

Colombia, Cuba y El Salvador plantean el estímulo, la promoción y el fomento del Estado a la propiedad social. Además, la obligación a cargo del Estado de darle protección.

Guatemala ordena la protección pública a la propiedad social, y especifica que debe prestársele asistencia técnica y crediticia.

Bolivia, Guatemala y El Salvador garantizan la existencia, posesión y desarrollo de la propiedad cooperativa.

1.5.2. **Características:**

4 Constituciones especifican algunas características de la propiedad social o solidaria. Bolivia y Cuba sujetan sus formas y transformaciones a la Ley; El Salvador la somete a Régimen Especial y Nicaragua le asigna el cumplimiento de Función Social y la sujeta al interés nacional.

Guatemala, El Salvador, Paraguay y Perú admiten la tenencia de la propiedad social en forma colectiva, comunal, comunitaria o de cualquier otra forma asociativa.

1.5.3. Tipos:

De las Constituciones que hacen referencia a la propiedad social o solidaria, 5 lo hacen específicamente a la propiedad cooperativa; 1, a la de las comunidades indígenas y 5, a la de otras formas organizativas sean éstas Asociativas, Solidarias, Autogestionarias, Comunes, Comunitarias o Comunitarias.

1.5.4. De Tierras:

4 Constituciones aceptan la propiedad social sobre las tierras en forma individual y 5 en forma Asociativa o comunal.

La Constitución de El Salvador dispone que la propiedad rústica de las cooperativas o comunidades campesinas no está sujeta a la limitación establecida por la propia Constitución a una misma persona natural o jurídica. Asimismo, dispone un plazo de 3 años para transferir tierras que excedan de esa limitación a Cooperativas, entre otras formas.

Cuba permite a los agricultores pequeños incorporar y disponer de sus tierras únicamente a cooperativas de producción agropecuaria o al Estado. Dispone, asimismo, que dichas tierras no pueden ser embargadas ni gravadas.

Paraguay le da el carácter de imprescriptible a la propiedad de las tierras de las comunidades campesinas y nativas.

Solamente las Constituciones de Colombia, Cuba, El Salvador y Nicaragua definen quienes son los titulares de la propiedad social de las tierras: Colombia expresa que los trabajadores agrarios y El Salvador y Nicaragua, los campesinos; Cuba y El Salvador, los agricultores en pequeño.

V. CONCLUSIONES:

1. La fuerza cuantitativa que tiene el Sector de la Economía del Trabajo (Social o Solidaria) en América Latina no se compagina con la debilidad de su tratamiento en la casi totalidad de las Constituciones de la Región.

Salvo el caso del Brasil, cuya Constitución ofrece un amplio régimen al cooperativismo, ninguna otra Constitución regula el Sector en proporción a la importancia real y creciente que tiene en la vida de cada uno de los países.

2. El Proceso de Constitucionalización del Sector de la Economía Social apenas se está iniciado en la Región, ya que sólo 3 Constituciones lo incorporan como un sector diferenciado de la Economía Nacional, al lado de los sectores Público y privado.

Además, su tratamiento es parcial al referirse casi exclusivamente a las cooperativas. Desconoce al Mutualismo y otras formas organizativas de singular importancia como las Cajas de Ahorro, los Fondos de Empleados, las Empresas Comunitarias, Solidarias, comunales y demás expresiones organizativas de los trabajadores.

3. Las propuestas Organizacionales y Doctrinales sobre la Constitucionalización del Sector, que pueden resumirse en tres puntos fundamentales: a) garantía de su autonomía; b) consagración del Derecho específico de Asociación y c) protección y fomento por parte del Estado, hasta ahora no han tenido consagración Constitucional exitosa en América Latina, salvo -quizás parcialmente- la última.

4. Estimamos conveniente que las disposiciones sobre el Sector de la Economía del Trabajo (Social o Solidaria) se incluyan dentro de las normas Programáticas o de aplicación de la Constitución, en el Capítulo de los Derechos Sociales, de manera concentrada y no mediante normas dispersas a lo largo del texto Constitucional.

5. Debiera estipularse en las Constituciones la existencia de un Sector Social o Solidario al lado del Público y del Privado, integrado por las diversas expresiones organizativas económicas de propiedad y gestión de los trabajadores, con plena autonomía organizativa y funcional; reconocerse expresamente el Derecho de Asociación específico y la Propiedad social, solidaria o comunitaria, como forma específica y privilegiada de propiedad, objeto de protección especial por parte del Estado.

6. Las Constituciones debieran otorgar el carácter de utilidad pública, social o nacional al Sector de la Economía del Trabajo, y la potestad de asumir la gestión de algunos cometidos públicos como los Servicios Públicos o sociales; señalar algunos principios fundamentales que lo rijan, y darle por finalidad su contribución al desarrollo integral de la Nación.

7. Sería conveniente que las Constituciones definieran las líneas maestras de la legislación sobre la materia, en ejecución de una política estatal de obligatorio apoyo y estímulo al Sector, de protección y preferencias, que pudiera consistir, entre otras, en las siguientes medidas: a) su participación en el sistema de planificación nacional; b) la existencia de un Organismo Administrativo único centralizador de la competencia estatal; c) garantía de asistencia y asesoría técnica; d) obligatoriedad de financiamiento estatal suficiente y oportuno; e) adecuado tratamiento tributario y f) promoción de la Educación solidaria.

VI. REFERENCIAS:

ARCAYA, M. (1971). *Constitución de la República de Venezuela (Constitución de 1961)*. Caracas. El Cojo.

BASSI, A. (1988). *Delle Imprese Cooperative e Delle Mutue Assicuratrici*. Il Codice Civile. Commentario. Art. 2511-2548. Milano. Giuffré Editores.

BLANCO, G. y TOZZINI, E. (1986). *Inserción Constitucional del Derecho Cooperativo en la Futura Reforma Constitucional*. Conclusiones del III Congreso Continental de Derecho cooperativo, 8.

BRUNET, R., GOMEZ, A. y otros. (1987). *Valoración Constitucional del Cooperativismo*. Conclusiones del III Congreso Continental de Derecho cooperativo, 9.

CALDERA, R. (1960). *Diario de Debates, Cámara de Diputados*. Venezuela.

COLOMER, A. (1990). *Introducción al Constitucionalismo Iberoamericano*. Madrid. Ediciones de Cultura Hispánica.

CONFEDERACION DE COOPERATIVAS DE COLOMBIA. (1988). *Propuesta de Reforma Constitucional*. Bogotá.

CONFEDERACION LATINOAMERICANA DE TRABAJADORES, Clat y CONFEDERACION LATINOAMERICANA DE COOPERATIVAS Y MUTUALES DE TRABAJADORES, Colacot. (1988). *El SET y la estrategia de su implementación en los países Latinoamericanos*. Caracas. I Taller Latinoamericano sobre el SET.

CONGRESO (I) CONTINENTAL DE DERECHO COOPERATIVO. (1969). *Carta de Mérida*. Universidad de los Andes. Mérida.

CONGRESO (II) CONTINENTAL DE DERECHO COOPERATIVO. (1976). *Carta Jurídica de San Juan*. San Juan.

CONGRESO (III) CONTINENTAL DE DERECHO COOPERATIVO. (1987). *Conclusiones*. Rosario.

DARANAS , M. (1979). *Las Constituciones Europeas*. Madrid. Editoria Nacional.

DE CAMPOS, J. (1987). *Proposición*. Conclusiones del III Congreso Continental de Derecho cooperativo, 11.

DE LUIS, J. (1987). *Presente y Futuro de la Fiscalidad de las Cooperativas*. Ciriec-España. 11. P.130.

FAJARDO, G. (1991). *El Derecho Cooperativo en España. Incidencias de la Constitución de 1978*. Ciriec/España. 11.

FARIAS, C., MORETTI, M. y otros. (1987). *Valoración Constitucional del Cooperativismo*. Conclusiones del III Congreso Continental de Derecho cooperativo, 4.

GALARZA, N. y COPPA, C. (1987). *Incorporación de los Principios Cooperativos a la Dogmática Constitucional*. Conclusiones del III Congreso Continental de Derecho cooperativo, 3.

GARCIA, A. (1989). *Marco Jurídico del Sector de la Economía del Trabajo*. La Economía del Trabajo. Bogotá. Colacot/Celatet.

GONZAGA, D. (1987). *Valoración Constitucional del Cooperativismo*. Conclusiones del III Congreso Continental de Derecho cooperativo, 5.

GUTIERREZ, L. (1987). *Valoración Constitucional del Cooperativismo en Bolivia*. Conclusiones del III Congreso Continental de Derecho cooperativo, 7.

JUNYET, F. y BERTOSSI, R. (1987). *La Cooperativa*. Buenos Aires. Ediar.

KATZAROV, K. (1959). *Socialisation et Coopératisation en Europe Orientale*. Extrait de la Revue des Etudes Coopératives. 116.

LLUIS, J. (1972). *Derecho de Cooperativas*. Barcelona. Bosch.

MACAGNO, M. (1969). *Principios Constitucionales de Derecho Cooperativo*. Primer Congreso Continental de Derecho Cooperativo. Mérida. ULA.

MARQUEZ, I. (1991). *Valoración Constitucional del Cooperativismo: Entidades Cooperativas, Formas Asociativas y Organizaciones Solidarias en la Constitución Política de Colombia (1991)*. Primer Encuentro Nacional sobre Derecho Cooperativo, Bogotá, 5 a 7/12/1991

MARQUEZ, I. (1991). *El Sector de la Economía Solidaria y la Nueva Constitución*. Derecho Cooperativo. Corporación Colombiana de Derecho Cooperativo. Bogotá. 2.

MONTOLIO, J. (1990). *Legislación Cooperativa en América Latina*. Madrid. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

MÜNKNER, H. (1989). *Comparative Study of Cooperative Law in Africa*. Marburg.

ORGANIZACION DE LAS COOPERATIVAS DE AMERICA. (1987). *Bases para la Legislación cooperativa de los países de América Latina*. Santa Cruz de la Sierra.

ORTIZ, R. (1987). *Valoración Constitucional del Cooperativismo*. Conclusiones del III Congreso Continental de Derecho cooperativo.1

PAOLUCCI, L. e DI PIETRO, A. (1988). *Codice dei Consorzi e Delle Cooperative Annotato con la Giurisprudenza*. Torino. Unione Tipografico Editrice Torinese.

PERIUS, V. (1989). *O Cooperativismo Na Constituinte*. Brasilia. OCB.

REYNA, S. (1987). *Innovaciones principales de la nueva Ley General de Cooperativas*. Economía Social y Empleo. Documentación Social. 68.

SALAMANCA, A. (1987). *Cooperativismo y Constitución*. Conclusiones del III Congreso Continental de Derecho cooperativo.10.

SANCHEZ, L. (1974). *Curso de Derecho Constitucional Comparado*. Madrid. Universidad de Madrid.

TORRES, C. (1986). *La Legislación Cooperativa en el Mundo*. Lima.

TORRES, C. (1987). *Las Constituciones y el Cooperativismo*. Conclusiones del III Congreso Continental de Derecho cooperativo.2

TRUEBA, A. (1971). *La Primera Constitución Político Social del Mundo. Teoría y Proyección*. México. Porrúa.

VASQUEZ, V. (1987). *El Cooperativismo en el Derecho Constitucional Panameño*. Conclusiones del III Congreso Continental de Derecho cooperativo, 6.

ZAVALA, J. (1961). *Las Constituciones Vigentes. América*. Buenos Aires. Editora Perrot.